

Me ocurrió el miércoles pasado en Burgos. Había ido a la ciudad del Cid Campeador invitado por la Fundación La Caixa para pronunciar una conferencia dentro de su programa *La vida es cambio, el cambio es vida*, dirigido a la adaptación saludable de las personas mayores. Mi visión, como economista, es que el aumento espectacular de la esperanza de vida y el consiguiente envejecimiento de nuestras sociedades constituyen uno de los cambios sociales y económicos más profundos que le han ocurrido a la humanidad, y que, en general, este cambio es para bien. Pero antes del inicio de la conferencia un periodista local me hizo una pequeña entrevista y me lanzó una pregunta inesperada: ¿qué hace un economista en un programa para personas mayores?

Recuperado de la sorpresa, la pregunta me hizo pensar en los muchos prejuicios e ideas preconcebidas y falsas que existen acerca de la situación y las condiciones de vida de las personas mayores, entendiéndolo por tales las de más de 65 años. Estos prejuicios no dejan ver que las personas mayores son una de las fuentes potenciales de creación de riqueza y desarrollo que tienen nuestras sociedades.

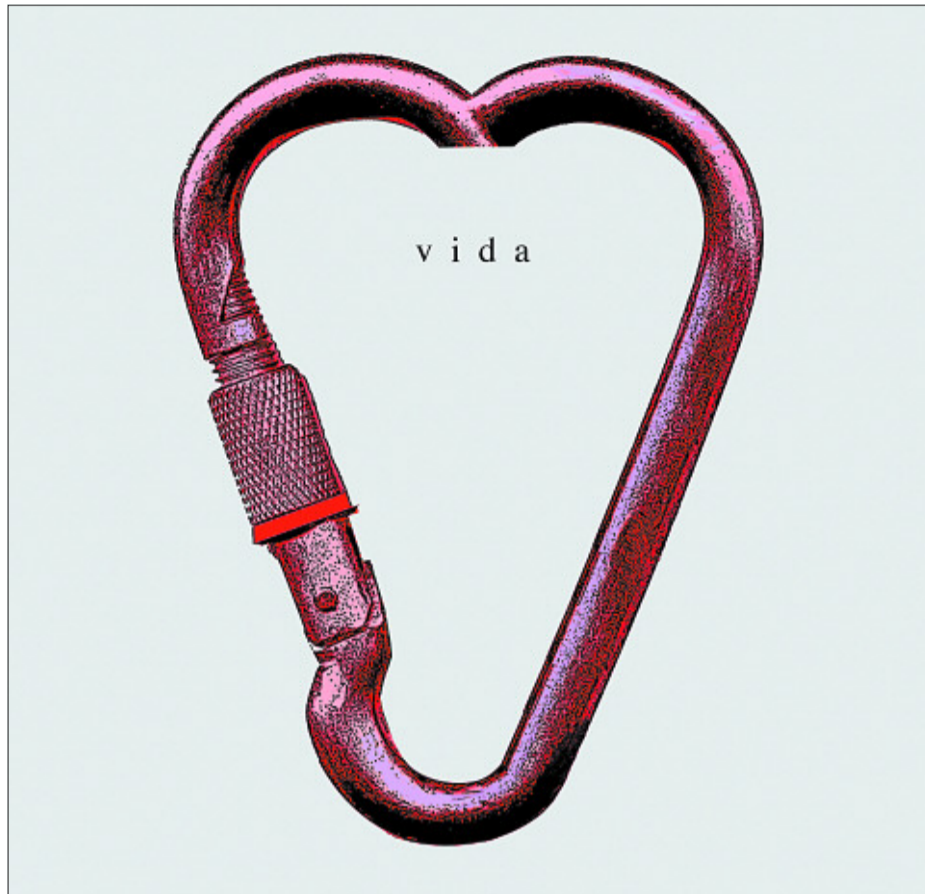
La visión convencional de los mayores es la de *viejos* que están al margen de las preocupaciones y los intereses cotidianos del resto de la población más joven, que han entrado en una vía secundaria, esperando lo inevitable, y que son, por tanto, campo reservado a las atenciones de médicos, psicólogos, filósofos o sacerdotes, pero en modo alguno tema de interés de los economistas.

Esta visión convencional sostiene, por un lado, que los trabajadores de edad avanzada son menos competentes, poco productivos y faltan más al trabajo que los más jóvenes; y, por otro, que las personas mayores no pueden valerse por sí mismas, necesitan vivir en residencias y hospitales, y un elevado número está senil. De hecho, es frecuente encontrarse con análisis aparentemente sesudos que nos alertan de una *maldeción de Matusalén*, en el sentido de que, al aumentar el coste de dependencia, una sociedad crecientemente poblada de personas mayores provocará una situación insostenible para la economía y los presupuestos públicos de nuestros países.

A eso se añade también el temor de que una elevada proporción de personas mayores acabe siendo una sociedad muy conservadora, egoísta, preocupada solamente por sus pensiones y poco propicia a los cambios espectaculares que están desarrollando en este comienzo del siglo XXI, la ciencia, la

Para siempre jóvenes

ANTÓN COSTAS



SILVIA ALCOBA

tecnología y la economía capitalista globalizada.

El contacto que ese programa de la Fundación La Caixa me ha permitido con personas mayores de toda España me ha hecho ver que la realidad no responde a esos prejuicios, y que la discriminación contra las personas mayores responde a ideas preconcebidas y falsas. De hecho, los promedios de productividad y asistencia al trabajo de los empleados de 60 años y más son más elevados que los de los grupos de trabajadores jóvenes (quizá por eso cuando Seat y los sindicatos acordaron en la última crisis llevar a cabo una serie de despidos utilizando indicadores objetivos de productividad y asistencia al trabajo, se encontraron con la

sorpresa de que los menos productivos estaban entre los jóvenes). Por otro lado, sabemos que el 95% de los mayores de 65 años viven en viviendas privadas sin dependencia de ningún tipo, y que tan sólo alrededor del 7% de las personas que están entre los 65 y los 80 años muestran síntomas pronunciados de senilidad.

Por tanto, ¿es correcto el panorama convencional de la vejez que se nos presenta con frecuencia? Sí y no. Por un lado, es cierto que estamos ante un cambio demográfico irreversible y sin precedentes. El aumento de la esperanza de vida, con el horizonte inmediato puesto en los 100 años de vida media, ha cambiado la sociedad que conocemos. El número de niños menores de

cinco años ha dejado de ser mayor que el de personas de más de 65 años. Del 2% o 3% de personas mayores, que era lo tradicional en la mayoría de países, hemos pasado al 15% actual, porcentaje que irá creciendo a medida que se jubile la numerosa generación del *baby boom*, los nacidos a finales de los años cuarenta y en los cincuenta. Sin duda, se trata de uno de los cambios sociales más importantes a los que ha asistido la humanidad, con consecuencias de todo tipo, económicas, empresariales, políticas o culturales.

Pero es (o puede ser) un cambio para bien, y no un apocalipsis social y presupuestario. El problema del déficit de la sanidad, que con frecuencia se menciona como consecuencia dramática, no está vinculado directamente al envejecimiento, sino a los avances de la medicina. El aumento del gasto sanitario se hubiese producido tanto si la esperanza de vida aumenta como si no; por eso conviene separar ambas cuestiones. Al contrario, es presumible que el crecimiento del gasto sanitario de las personas mayores se modere como consecuencia de que las condiciones de salud de los nuevos viejos (la generación del *baby boom*) no tendrán nada que ver con las condiciones y circunstancias personales que hasta ahora asociábamos a la vejez. Además, todo anticipa que los avances de la medicina regenerativa van a ser espectaculares, tanto para el alargamiento como para la mejora de las condiciones de vida.

Seremos para siempre jóvenes, hasta el día final. Una sociedad sin edades.

Desde esta perspectiva, el problema social es otro: ¿qué hacemos con esos 30 o 35 años de vida que la ciencia y el desarrollo económico conceden a las nuevas generaciones de jubilados? ¿Cómo aprovechar la fuente potencial de riqueza que significan las personas mayores? ¿Qué cambios en la organización social, familiar, laboral y empresarial son necesarios? ¿Es lógico que la jubilación siga siendo a una edad tan *joven* como los 60 o 65 años? ¿Es adecuado que se produzca como una ruptura radical y completa del mundo laboral y no como un proceso gradual? ¿No sería mejor que entre todos —gobiernos, empresas, trabajadores— fuésemos preparando desde ahora ese nuevo escenario, mientras la generación del *baby boom* esté aún en activo? Mi impresión es que el manual de instrucciones para el uso de la jubilación está aún por escribir.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.

Alud migratorio, avalancha, incluso invasión. Así han descrito la situación en Canarias los alarmistas que han querido hacer de un drama humano una agresión migratoria en toda regla. Estos argumentos mezclan el *efecto llamada* de la desesperación con las tímidas políticas en materia de inmigración, y los alarmistas, con objetivos claramente electorales, sólo ofrecen como solución el endurecimiento de dichas políticas. Insisten en relacionar la llegada de inmigrantes con la delincuencia e incluso asocian su llegada al derecho de voto, obviando que dicha propuesta se dirige a la nueva ciudadanía que hace años ejerce sus obligaciones, pero que carece de derechos políticos básicos.

Ante el descaro de la derecha, sólo cabe hacer un ejercicio de pedagogía. Lo que vivimos en Canarias es lo que se vivió en Andalucía. La diferencia es que la impermeabilización de las fronteras ha convertido las rutas de llegada en mucho más peligrosas, que la desesperación en África ha crecido, y que, por mucho que digamos que sólo aceptamos inmigración regular, ningún inmigrante procedente del África subsahariana tiene mecanismo legal de entrada. La llegada en cayucos es, sin lugar a dudas, un drama humanitario, pero no alcanzan el 5% del total de los que acceden al territorio español de forma irregular por fronteras aéreas y terrestres. Lamentablemente, el Gobierno socialista ha caído en el discurso y la lógica

Inmigración, más pedagogía, menos alarmismo

JOAN HERRERA I TORRES

de la dureza, sin reflexionar sobre el hecho de que esta forma de hacer ha fracasado estrepitosamente. Con una de las legislaciones más restrictivas y duras en materia de extranjería, España ha recibido el mayor número de inmigrantes de su historia. Decir que a partir de ahora cualquier inmigrante que acceda al territorio español de forma ilegal será repatriado, que el mercado laboral no acepta más inmigración, decir que los recién llegados pueden reducir la calidad de los servicios sociales es reproducir un discurso y una práctica fracasada, renunciando a hacer pedagogía. Obviar que el crecimiento del PIB o el superávit de la Seguridad Social se debe a éstos es situarse en un terreno hegemónico de la derecha: la restricción de derechos.

La sociedad del siglo XXI va a ser diversa. Los discursos y prácticas que ahora se establezcan decidirán si esa diversidad se da en un marco de integración o de exclusión. El Gobierno no se debe dejar arrastrar por el recurso fácil de la dureza, y debe abordar una política

de inmigración activa que ayude a gobernar el fenómeno en un contexto en el que esa nueva ciudadanía ha sido la base principal del crecimiento del país. Para ello, es fundamental tener una política de permeabilidad razonable e inteligente en las fronteras españolas, ya que la impermeabilidad de las mismas no ayuda a gobernar el proceso, sólo añade dramatismo. Es necesario definir canales estables de entrada para los ciudadanos de países del África subsahariana de forma compartida con el resto de países de la Unión Europea. Además, deben condicionarse los convenios en el control de fronteras con Marruecos o Mauritania al estricto cumplimiento de los derechos humanos, o ¿acaso nos podemos permitir dar recursos para que se abandone a personas en medio del desierto?

Debemos adoptar, asimismo, una actitud responsable en la acogida, garantizando el acceso al derecho de asilo y refugio a los inmigrantes con un trato individualizado de los mismos y ofreciendo soluciones realistas. Por muy duros que

sean los discursos, un inmigrante que cuenta con un periodo de acogida de apenas 15 días y con orden de expulsión no desaparece. Estos nuevos parias se convierten en fuente de explotación laboral y su única salida es continuar siendo explotados. Hoy, concluyen su periodo de primera acogida sin una cédula de inscripción, sin poder acreditar su ser, sin poder empadronarse y, por tanto, sin posibilidad de acceder a los servicios más básicos como el de la sanidad. Tenemos que establecer un doble mecanismo: una acogida de 12 semanas que permita acceder a un mínimo conocimiento del idioma y una formación laboral básica y permisos temporales de trabajo y residencia que les den acceso, tal como hacen en Alemania, a unos instrumentos mínimos para su integración.

Por último, hay que enfrentarse al esquema de la derecha. No sólo haciendo pedagogía, sino luchando en contra del hecho de que el desarrollo económico del país se cargue sobre las espaldas del más de un millón de inmigrantes a los

que se permite trabajar en situación irregular y en condiciones de explotación. Para ello no basta con un proceso extraordinario de regularización. La política debe ir por otro lado: incrementar significativamente los medios de la inspección de trabajo para detectar la explotación de trabajadores extranjeros y evitar el *efecto llamada* que supone que es posible trabajar en España sin papeles. Además, hay que crear un marco estable de regularización que no se sustente exclusivamente sobre criterios laborales, sino de arraigo. La mejor política migratoria es aquella que define un Estado de bienestar potente, que permite hacer políticas educativas, sanitarias o de vivienda para los sectores más vulnerables de la sociedad, entre los que está la nueva inmigración; una política que les devuelve, como mínimo, parte de lo que están aportando, que sume a las obligaciones la igualdad de oportunidades.

El Gobierno tiene que corregir el rumbo que está tomando y liderar una política de inmigración de verdad evitando ceder el terreno a la derecha. Lo que está en juego es el modelo de Cataluña diversa. Y aunque estemos en elecciones, no es aceptable el deslizamiento hacia la demagogia que nos condena a una diversidad excluyente.

Joan Herrera i Torres es portavoz del grupo IU-ICV en el Congreso de los Diputados.